

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	769
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2023-00144-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
DEMANDADA:	CAROLINA CONCHA CAICEDO
ASUNTO:	Niega medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO

Se decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. SUB 34993 del 6 de febrero de 2018, mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Carolina Concha Caicedo a partir del 15 de enero de 2017, toda vez que el informe investigativo COLCLO-39887 indicó que no convivió con el causante, señor Sabas Octavio Velilla Escobar.

II. ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones, a través de apoderada especial, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho (Lesividad) contra la Resolución No. SUB 34993 del 6 de febrero de 2018, por la cual reconoció a la señora Carolina Concha Caicedo como beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes por el deceso de su cónyuge Sabas Octavio Velilla Escobar, y como medida cautelar pidió la suspensión provisional de los efectos de dicho acto administrativo, pues el informe técnico de investigación (número de registro de apertura de la investigación: COLCO-390887 Número de Radicado: 2022_11391104) concluyó que no existían pruebas fehacientes que pudieran demostrar su convivencia sin interrupción con el difunto durante los últimos 5 años de vida del causante.

Del escrito cautelar se corrió el traslado previsto en el inciso 2 del artículo 233 del CPACA, oportunidad en la cual la apoderada de la parte demandada se opuso a la medida por falta de sustentación, pues la entidad demandante se limitó a invocar el artículo 233 del CPACA, en cuanto a su fundamento se remitió a la demanda, no demostró el perjuicio irremediable ni la violación del orden jurídico y no explicó por qué de no decretarse la medida de apremio resultaría nugatoria la sentencia que dirima el litigio y, por el contrario, ripostó arguyendo que en caso de decretarse se afectaría el mínimo vital de su representada.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 238 de la Constitución Política consagra que *“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”*.

A su turno, el artículo 229 del CPACA prevé que *“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que*

considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 231 *ibídem* prescribe que “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos” (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo constituye una excepción a la presunción de legalidad que los ampara, de manera que por su trascendencia el legislador ha dispuesto que su viabilidad requiere que la solicitud esté debidamente motivada, que la infracción de las normas superiores en que se fundó o debía afincarse sea manifiesta y que pruebe siquiera sumariamente los perjuicios si pretende la indemnización de éstos.

Como se trata de una medida cautelar preventiva, su finalidad es la de asegurar transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, es decir, impedir la aplicación del acto administrativo impugnado y precaver eventuales perjuicios, mientras se resuelve de manera definitiva la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza jurídica de esta cautela y sus rasgos esenciales, el Consejo de Estado ha indicado:

*“La medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como medida cautelar que es, según las voces del artículo 229 del C. de P.A. y de lo C.A., exige ‘petición de parte debidamente sustentada’, y acorde con el artículo 231 *ibídem*, procederá ‘por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud’.*

La nueva norma precisa que: 1º) La medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. 2º) La procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad pueden acontecer si la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal -cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que antes era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos adicionados con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio pues la transgresión debía aparecer prima facie. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que, desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa alegada, pudiendo al efecto: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º inciso del artículo 229 del CPACA, en cuanto ordena que ‘la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’” (Auto de 24 de enero de 2013, exp. 2012-00068-00).

Es claro, entonces, que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado supone unos requisitos formales y otros sustanciales, cuya inobservancia podrían dar al traste con tal solicitud. Entre los primeros aparecen, por una parte, la sustentación de la medida, esto es, la indicación de las normas violadas y el concepto de violación, advirtiendo que tal justificación deber ser independiente de la aducida en la demanda para fundar la nulidad, es decir, una cosa es la argumentación de la suspensión provisional y otra la de la nulidad, a menos que en aquella se remita para tal efecto a esta; y por la otra, la demostración, al menos sumariamente, del perjuicio que con el acto impugnado se le cause o llegare a causar, si entre sus pretensiones figura la indemnización del mismo.

En el presente asunto la entidad demandante considera que la Resolución No. SUB 34993 del 6 de febrero de 2018, por la cual Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Carolina Concha Caicedo a partir del 15 de enero de 2017, se apartó de las normas legales en las cuales debía fundarse, pues no se logró constatar que la demandada y el causante hubieran convivido en los cinco (5) años previos a su muerte, desconociendo con ello el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que fija los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional.

De acuerdo con el artículo 231 del CPACA, es requisito sustancial para que proceda la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que la violación de las normas superiores citadas como infringidas, surja del análisis de la decisión acusada y su confrontación con tales preceptos o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, por lo que corresponde acometer esa tarea a continuación.

La Corte Constitucional ha señalado que la pensión es un “*salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo*”. Por lo tanto, “*el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador*”. Esto muestra que la pensión es un derecho constitucional de amplia configuración legal, pues corresponde a la ley definir los requisitos para acceder a la misma. Además, se trata de un derecho que no es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador” (sentencia C-177 de 1998), prestación que puede ser sustituida a los beneficiarios para garantizar la cobertura ante la contingencia de la muerte de quien era el sostén económico de la familia (sentencia SU-149 de 2021).

Frente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte (...).”

El Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 24 de febrero de 2015¹, reconoció la sustitución pensional a la cónyuge supérstite, con los siguientes argumentos:

“Respecto al tema en particular, esta Sección ha sido particularmente cuidadosa en interpretar esta disposición en cada caso concreto, pues con base en los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, todas aquellas garantías atinentes a la Seguridad Social comprenden tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente en igualdad de condiciones; en esa medida cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución debe valorarse i) el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte y ii) la dependencia económica de las potencialmente beneficiarias, para efectos del reconocimiento de la prestación.

¹ Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Recordemos que la familia a la luz de la Constitución Política de 1991, es concebida como un fenómeno de la vida social que nace de la decisión libre de dos personas que procuran un proyecto en común y que merecen la protección Estatal en condiciones de igualdad, tanto la que está constituida por el vínculo del matrimonio, como aquella emanada de la voluntad de establecer una unión marital de hecho. Por consiguiente, el reconocimiento de la sustitución pensional dependerá, en cada caso, de los hechos que acrediten los(as) interesados(as) para acceder al beneficio, quienes tienen el deber de ejercer una adecuada actividad probatoria para tal fin”.

Sobre la convivencia marital permanente, el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de noviembre de 2021², citó una providencia de 2012, en la cual fijó su alcance en materia de sustitución pensional, a saber:

“En relación con la prueba de la convivencia efectiva con el causante, esta Corporación ha sostenido lo siguiente³:

‘La convivencia, entendida no solamente como ‘habitar juntamente’ y ‘vivir en compañía de otro’ sino como acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de protección de la sustitución pensional.

Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia, no se pueden desvirtuar por la ‘separación’, cuando esta eventualidad se impone por la fuerza de las circunstancias.

El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común.

De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir una familia.

En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:

‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.

Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte, que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por muerte del afiliado o pensionado.

Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de conformar un hogar y tener una comunidad de vida’ [...].

Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos inmediatamente anteriores a la muerte del causante, esta Corporación ha señalado que «[...] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico [...]».

²Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 25 de noviembre de 2021, Radicado 25000-23-42-000-2018-00557-01(0070-21)

³ Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 24 de octubre de 2012. Radicación 25000 23 25 000 20100 0860 01 (2475/11).

Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido pensionado' [Resalta la Sala].

En este orden, se observa que la exigencia de ese requisito, busca evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y convivencia que no tenga el carácter de permanente, se origine el derecho a sustituir, en forma vitalicia, una prestación".

Retomando el asunto que concierne a esta providencia, la misma corporación, en sentencia dictada el 7 de febrero de 2019 dentro del proceso con número interno No. 5418-18, C.P. Dra. Sandra Lisseth Ibarra Vélez, determinó que una vez analizados los artículos 229 a 231 del CPACA, los requisitos para decretar medidas cautelares se clasifican en tres categorías, consistentes en: i) requisitos formales, ii) requisitos materiales y iii) requisitos de procedencia específicos. Veamos:

"De las normas antes analizadas⁴ se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de procedencia específicos (...).

6.3.1.- Requisitos de Procedencia, Generales o Comunes de Índole Formal. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,⁵ de índole formal,⁶ son: **(1)** debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo;⁷ **(2)** debe existir solicitud de parte⁸ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio⁹.

6.3.2.- Requisitos de Procedencia Generales o Comunes de Índole Material. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,¹⁰ de índole material,¹¹ son: **(1)** que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia;¹² y **(2)** que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda¹³.

23. Respecto del primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, esto es, que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso, la Sala aclara que el «objeto del proceso», desde un primer nivel de significación, que se corresponde con la teoría procesalista clásica, es la materia o cuestión del litigio, el «thema decidendi» que se somete a consideración de la jurisdicción, e involucra, no sólo las pretensiones, sino que también hace referencia a los hechos, normas y pruebas en que estas se fundan.

24. Ahora bien, desde un punto de vista constitucional de aplicación del principio de primacía del derecho sustancial,¹⁴ el «objeto del proceso», y en general «de todo proceso que se adelante ante la jurisdicción contencioso administrativo», también comprende, en armonía

⁴ Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231.

⁵ En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

⁶ En la medida en que estos requisitos únicamente exigen una corroboración formal y no un análisis valorativo.

⁷ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

⁸ De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las "medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".

⁹ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

¹⁰ En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

¹¹ En la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo.

¹² Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

¹³ Artículo 230, Ley 1437 de 2011.

¹⁴ Artículo 228 de la Constitución Política de 1991. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011,¹⁵ la finalidad de asegurar la «efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley y la preservación del orden jurídico». Dicho de otro modo, el objeto de todo proceso judicial es en últimas, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, el decreto y ejecución de una medida cautelar también debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estos no estén en discusión, aclara la Sala.

25. Así pues, es claro para la Sala, que el juez contencioso debe evaluar con especial cuidado si la medida cautelar solicitada en verdad está orientada a garantizar el objeto del proceso, puesto que al ordenar su decreto también se pueden lesionar las prerrogativas fundamentales de los perjudicados con las medidas cautelares. Ante tales circunstancias, las autoridades judiciales deben propender por aplicar las normas pertinentes al caso concreto, de manera tal que logre el menor perjuicio posible a los derechos fundamentales, siempre que estos no estén en discusión, se reitera.

26. Finalmente, ya para agotar lo que tiene que ver con el primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, la Sala precisa que respecto de la exigencia de que la medida cautelar solicitada esté orientada a garantizar la efectividad de la sentencia, ello se explica en razón de que con las cautelas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, es decir, que propenden por la seriedad de la función jurisdiccional, y por esta vía, guardan relación directa con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en la medida que con las medidas cautelares también se asegura que las decisiones de los jueces sean ejecutadas y cumplidas.

6.3.3.- Requisitos de Procedencia Específicos de la Suspensión Provisional de los efectos del acto administrativo. La Sala los denomina «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las diferentes medidas cautelares enlistadas, a modo enunciativo, en la Ley 1437 de 2011¹⁶. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda¹⁷ así: **(a)** si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud;¹⁸ y **(b)** si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas, debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios”.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que la solicitud cumple con el primer “requisito común de índole formal”, pues la Administradora Colombiana de Pensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, solicitó la nulidad de la Resolución No. SUB 34993 del 6 de febrero de 2018, por medio de la cual reconoció a la demandada el 50% de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Sabas Octavio Velilla Escobar.

En cuanto a los “requisitos comunes de índole material”, la jurisdicción ha predicado que sobre estos hay unos sub-requisitos, a saber: i) que la medida cautelar sea necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia; y ii) que la cautela tenga relación directa con las pretensiones de la demanda.

Justamente sobre el primer requisito, es evidente que al examinar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado y las pruebas aportadas con la demanda se constata que esa medida cautelar no es materialmente necesaria para la protección del objeto del proceso y la efectividad de la sentencia que adopte el juzgado, toda vez que no se acreditó la ostensible vulneración del ordenamiento legal y el perjuicio irremediable que le causaría a la entidad demandante o que los efectos de la sentencia se tornarían nugatorios, pues para fundamentarla Colpensiones hizo el reenvío a la demanda,

¹⁵ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁶ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁷ Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

¹⁸ Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011.

en la cual, si bien indicó los fundamentos legales, las normas quebrantadas y el concepto de violación, nada expresó sobre la concurrencia de tales sub-requisitos, es decir, en qué medida y por qué razón el no decreto de la suspensión provisional colocaría en riesgo el objeto del proceso y tornaría ilusoria la sentencia que finiquitará el litigio.

La parte demandante no niega categóricamente que la señora Carolina Concha Caicedo sea potencialmente beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que le reconoció, pues sólo adujo que tras realizar la investigación para determinar si se cumplía o no con el requisito de la convivencia marital previa al fallecimiento del causante, no fue posible entrevistarse con la demandada y los testigos que declararon extra-judicialmente en sede administrativa, situación que constituye el fondo de la controversia planteada en la demanda.

Es más, el decreto de la cautela solicitado por Colpensiones en esta etapa temprana del proceso podría, en principio, menoscabar los derechos fundamentales de la demandada a la seguridad social y al mínimo vital, pues a través del escrito mediante el cual describió el traslado de esa medida manifestó que la mesada pensional que recibe constituye su único sustento económico, de modo que sopesados los efectos de una y otra circunstancia, lo razonable en esta fase inicial del juicio es desestimar la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado y diferir su análisis para el estudio de fondo que se hará en la sentencia.

Corolario, no siendo necesaria la medida cautelar implorada para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y dado que para establecer la vulneración de las normas invocadas como infringidas se requiere un análisis exhaustivo del acto administrativo demandado, las pruebas valoradas en vía administrativa y las que se aporten en sede judicial, estudio que es propio de la sentencia, se concluye que no se cumple el primer requisito de procedencia común de carácter material para acceder a la suspensión provisional solicitada, circunstancia que releva al juzgado de analizar si se reúnen o no los restantes requisitos sintetizados por el Consejo de Estado y, por ende, se negará el decreto de esa medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. SUB 34993 del 6 de febrero de 2018, por la cual Colpensiones reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes a la señora Carolina Concha Caicedo por el fallecimiento de su cónyuge Sabas Octavio Velilla Escobar, impetrada por la Administradora Colombiana de Pensiones.
2. RECONOCER al Dr. Daniel Ricardo Arango González, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.774.028 expedida en Armenia y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 253941 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante en el archivo *"13SustutucionPoder.pdf"* del expediente digital.
3. RECONOCER a la Dra. Catalina Restrepo Fajardo, identificada con cédula de ciudadanía No 52.997.467 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 164785 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la señora Carolina Concha Caicedo, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante en el archivo *"07Poder.pdf"* de la carpeta de medidas cautelares del expediente digital.
4. PROSEGUIR con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

CRR

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5af55290b153a1fd2f44c81c3029a30f34668c0b531b0cab565aa12e8c1d6cfd**

Documento generado en 02/10/2023 01:08:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>